

2. Simplificar los tipo penal evasivos, agrupándolos en menor cantidad de figuras típicas, a saber: defraudación fiscal genérica, retención fraudulenta, obtención indebida de beneficios e insolvencia maliciosa.
3. Reservar la pena corporal para la hipótesis de defraudación más graves.
4. Prever penas de prisión de menor duración, lo cual puede generar menor resistencia a su aplicación por parte de los jueces.
5. Aplicar la ley penal tributaria para la defraudación de los impuestos nacionales. La preservación de la renta provincial viene dada, indirectamente, por la distribución efectuada a través del régimen de coparticipación federal. Teniendo en cuenta el desarrollo jurídico-institucional de los distintos niveles de gobierno, se considera perjudicial dotar de una iniciativa penal tan grave a los fiscos provinciales y municipales. En estos casos las sanciones pecuniarias se muestran como la protección más adecuada.
6. Exteriorizar el bien jurídico tutelado.
7. Eliminar las disposiciones de carácter procesal.

Buenos Aires, diciembre de 1995

#### *Consejo Directivo*

*(Pronunciamento elaborado por la Comisión de Derecho Penal Tributario y aprobado por el Consejo Directivo)*

### **3. EL PROCESO TRIBUTARIO Y EL ROL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION**

La Asociación Argentina de Estudios Fiscales ante la inminencia del tratamiento de un proyecto de ley que por vía delegada, con dudoso ensamble constitucional, autoriza al Poder Ejecutivo de la Nación a suprimir la vigencia efectiva del Tribunal Fiscal de la Nación, creado hace treinta y cinco años por ley del H. Congreso de la Nación, entiende respetuosamente hacer conocer a los poderes públicos y a la comunidad en general el desacuerdo jurídico de tal proyecto que resta credibilidad al Estado de Derecho.

#### **I**

Es premisa constante en el ámbito de una sociedad occidental y respetuosa de un equilibrio entre el Estado y los individuos, que todo el ordenamiento justo del derecho, de nada le sirve a los miembros de una comunidad jurídica si la seguridad de la

realización del derecho no aparece garantizada por tribunales independientes y especializados en la materia a decidir y ello con más intensidad en el campo de la imposición.

El apogeo del proceso tributario existe como tal cuando se sustenta en principios jurídicos fundamentales que son esenciales para reforzar la seguridad jurídica y ellos no pueden sacrificarse so pretexto de que algunas de sus etapas constituyen, supuestos pasibles de ser obviadas en contra de los administrados.

Ello está preavisando que todo intento de sustraer al Administrado de garantías procesales como las que brinda el Tribunal Fiscal de la Nación, significa lisa y llanamente desarmonizar el accionar del Estado con las garantías individuales consagradas por el ordenamiento vigente.

La seguridad jurídica es requisito esencial para la plena realización de la persona y para el desarrollo de la actividad económica donde un Tribunal Fiscal independiente e imparcial como el que existe actualmente en nuestro país, al que se somete el Estado en una situación de igualdad con las otras partes, es condición indispensable de dicha seguridad.

Sin duda, una de las materias de extraordinaria importancia del derecho tributario es el aspecto procesal por ser la parte más dinámica que impulsa y da eficacia al ordenamiento jurídico impositivo del ámbito estatal, señalando la manera del desenvolvimiento y la sustanciación de los procesos dentro de un orden sistemático que permita tramitar y concluir con una apreciación cabal de la realidad de lo litigado.

Sin la existencia de vías recursivas idóneas como existen actualmente por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con carácter suspensivo del criterio administrativo incoado contra un administrado, se abriría un cauce discrecional en la adopción de medidas y decisiones de fiscalización drásticas y a veces injustas por parte de la Administración en perjuicio de los contribuyentes que ven disminuídas sus posibilidades de defensa ante el uso omnímodo de las facultades administrativas.

Cuando el día 6 de noviembre de 1959, el Gobierno constitucional presidido por el Dr. Arturo Frondizi, elevó al H. Congreso de la Nación el proyecto de ley sobre creación de un Tribunal Fiscal de la Nación, concretado luego mediante ley n° 15.265, introdujo en el sistema legal argentino un principio garantista y de seguridad jurídica en los procesos tributarios que la sociedad reclamaba insistentemente desde larga data, apoyado ello en la argumentación que antecede.

La decisión gubernamental de dicho entonces se insertó en todo el marco de los operadores económicos, tantos nacionales como foráneos, los cuales sin distinción de categorías vieron protegidos desde ese momento, como en los países de mayor gravitación jurídica, el derecho de recurrir decisiones administrativas de índole tributaria-aduanera sin la exigencia de abonar previamente las pretensiones de dicha categoría y por tal mecanismo vieron disipadas las inseguridades que se mostraban a ese momento en el entorno del proceso tributario.

En dicho proyecto de ley se hacía constancia expresa que su finalidad tenía como norte principal no sólo asegurar de la mejor manera posible la defensa del contribuyente, sino resguardar los legítimos intereses de la Administración.

A ello debe adicionarse que la Comisión Asesora creada a tal efecto para la proyección de dicho Tribunal Fiscal había anticipado que este órgano supone una innovación

fundamental en nuestro medio que quizás no pueda lograrse con la necesaria amplitud en la esfera judicial, donde los métodos tradicionales carecen de la elasticidad suficiente como para permitir el funcionamiento de un organismo de una dinámica y modos de obrar completamente distintos.

Dicho en otras palabras, y bajo el marco de la seguridad jurídica, la creación del Tribunal Fiscal de la Nación respondió a otorgar a los contribuyentes una vía recursiva procesal con el fin de evitar que ciertas facultades discrecionales de la Administración pudieran ser ejercitadas arbitrariamente.

Ello fue ponderado en forma principal para garantizar a la inversión nacional y extranjera que sólo procederían criterios impositivos administrativos luego de su previa discusión por ante un tribunal de especialización tributaria independiente.

Bajo tal acertado objetivo gubernamental, se reinsertaba al contribuyente como sujeto pleno de derecho y desaparecía de la vivencia el ciudadano vasallo, donde el Administrador era juez y parte.

Debemos retrotraernos a los fundamentos de dicha Comisión Asesora para tener presente que la ley 15.265 encuentra sólidos antecedentes operativos en la Tax Court de los Estados Unidos de Norte América, donde dicho órgano, independiente de la rama ejecutiva del Gobierno, actúa como un verdadero tribunal de justicia y con todas las garantías de tal.

Lo que antecede disipa cualquier opinión que pudiera intentarse sostener como de aventura procesal la creación del Tribunal Fiscal de la Nación en nuestro ámbito jurídico.

Bajo estos indiscutibles antecedentes recogidos en la doctrina como el dogma de uno de los supuestos de la seguridad jurídica, aparece incuestionable que la existencia del Tribunal Fiscal responde a un valor sustancial que incide en la estructura y en la dinámica del funcionamiento del derecho como justicia procedimental, habida cuenta que se trata de un órgano destinado a regular los procedimientos recursivos para merituar la interpretación y aplicación del derecho por parte del Fisco, para brindar en sus decisiones, dimensión de certeza con el fin de ofrecer frenos posibles, o para ser más precisos, interdictar legalmente la arbitrariedad en contra del administrado.

Mensurando la realización concreta de la garantía de defensa del contribuyente, aparece incuestionable que la supervivencia del Tribunal Fiscal, responde a preservar que si bien el Estado de Derecho es el dilema entre activismo y continencia de la Administración, ello no impide afirmar que la mejor intencionada acción social del Estado encuentra sus límites en las garantías individuales de los contribuyentes.

## II

En el proceso jurisdiccional el Tribunal Fiscal cumple un rol garantista esencial, dado que por ante el mismo se debaten el conflicto de intereses entre el Fisco y el contribuyente, el cual se somete a la decisión de jueces especializados e independientes de la administración activa cuyos pronunciamientos son sustitutivos de la voluntad de las partes.

Por vía legal en la República Argentina y a través del ordenamiento n° 15.265 actúa

el Tribunal Fiscal de la Nación como un órgano jurisdiccional administrativo e independiente del Poder Ejecutivo, cuyos pronunciamientos son recurribles por ante el Poder Judicial. En este último aspecto igual situación ocurre en México, Perú, Guatemala, y Costa Rica, y próximamente igual estructura se adoptará en la República de Panamá.

Los países precitados, al igual que el nuestro, han creado tribunales fiscales administrativos cuyas normas de constitución le han atribuido carácter jurisdiccional y consecuentemente se les ha reconocido un grado de independencia respecto de la Administración activa.

En las VII Jornadas de Estudios Tributarios realizadas en el año 1976 en Pamplona, España, se reconoció expresamente que a partir del funcionamiento del Tribunal Fiscal en la República Argentina se ha generado la actuación de jueces interdisciplinarios que con una mayor especialización, han ofrecido la posibilidad de formar una jurisprudencia más perfecta, especialmente en virtud de algo muy conocido, que no otro que la frecuencia de actuación, es un factor de afinamiento de los conceptos y de orientación.

Por otra parte las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en el año 1958 en México, hicieron expresa mención de lo necesario de la existencia de tribunales especializados, incluso en la órbita administrativa, integrados por miembros idóneos en la aplicación del derecho tributario, para dirimir en plena imparcialidad y criterios de independencia, los litigios de orden tributario.

Tal reconocimiento doctrinario de foros científicos va unido a que el Tribunal Fiscal fue concebido, y cumplió con sus objetivos, mediante el establecimiento de una jurisdicción plena sin limitación de ninguna clase en la revisión de la determinación administrativa, bajo el principio procesal de que dicho órgano debe conocer el derecho aplicable "iura curia novit" aún supliendo las deficiencias de las partes.

En el Seminario Técnico organizado por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios, del cual la República Argentina es miembro activo, celebrado en el año 1992 en Guanajuato, México se enfatizó que la libertad de apreciación del Tribunal Fiscal, por parte de sus integrantes de reconocida especialización tributaria, viene dada en razón que la norma legal lo autoriza a no sujetarse a lo alegado por las partes, en cuyo caso, la sentencia puede prescindir de las argumentaciones desarrolladas tanto por el contribuyente como por el Fisco, y analizar y fundamentar en otros conceptos el litigio sometido a su decisión.

## III

No puede soslayarse, y tal vez en esto radique un ataque indebido a la permanencia del Tribunal Fiscal de la Nación, que mediante la vía recursiva instaurada ante el mismo se derogó la arcaica norma del "solve et repete" como condición para apelar las decisiones administrativas por ante un órgano jurisdiccional independiente.

Esta conquista jurídico-social, interpretada en forma errónea y minoritaria como principio "contra fiscum", de manera alguna en la sociedad moderna puede ser retrotraída a su estado anterior.

Debe tenerse presente que al día de hoy, y mediante el imperio que emana de la reforma constitucional, la derogación del principio "solve et repete" tiene consagración en el articulado del art. 75 de la Carta Magna, visto que tal garantía encuentra plena ratificación en el Pacto de San José de Costa Rica, en la condición jurídica supra que el nuevo texto constitucional le ha conferido.

Y ya que nos hemos referido a los Tratados ratificados y aprobados por la República Argentina, no podemos evitar referirnos al Artículo X del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, aprobado por leyes 17.799 y 24.425), que exige la existencia de un Tribunal especializado e independiente, como lo es el Tribunal Fiscal de la Nación.

La eventual supresión de este organismo por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades que le serían delegadas por el Proyecto de Ley, sería contraria al inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, ya que importaría desconocer la exigencia de dicho Tratado y la prevalencia que nuestra Constitución acuerda a éstos por sobre las leyes.

En las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en el año 1993 en Lima, Perú, se enfatizó en forma precisa sobre el valor garantista de la derogación del principio "solve et repete" como muestra de una sociedad respetuosa del administrado, y en dicho evento se hizo expreso hincapié que cualquier intento de insertar el mismo, como condición para la revisión del acto por un órgano jurisdiccional administrativo era una muestra manifiesta de falta de seguridad jurídica en la aplicación del tributo.

Mas aún, las mismas Jornadas abogaron por la supresión de la regla "solve et repete" y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado e inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional, así como la posibilidad de suspensión del acto impugnado, son necesarios para la igualdad de las partes.

Eventos de igual jerarquía científica también han proclamado que la pretensión de reimplantar el principio de "solve et repete" por la vía de eliminación del actual proceso por ante el Tribunal Fiscal de la Nación es una arbitrariedad que menoscaba el derecho irrestricto del contribuyente, atendiendo que dicho derecho subyace en los postulados de la vida en sociedad.

Las XXIII Jornadas Tributarias celebradas en el año 1993 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, señalaron que el Tribunal Fiscal de la Nación cumple un rol importante en la relación fisco-contribuyente, otorgándole transparencia al sistema tributario, erradicando la anacrónica figura del "solve et repete" y dando la posibilidad al contribuyente o responsable de litigar en un ámbito altamente especializado permitiéndole además, mantener en suspenso el pago de la obligación tributaria.

El legislador, imbuído de espíritu reformista no puede ignorar la fecundidad del derecho comparado, porque el mismo nos enseña, en primer lugar, a conocer las líneas esenciales de nuestro propio derecho.

Si el H. Congreso de la Nación detiene su proceder en investigar en esta última fuente, podrá comprobar que el proyecto de supresión del Tribunal Fiscal de la Nación no encuentra antecedentes válidos que así lo justifiquen.

El clima de seguridad jurídica, sin el cual no hay libre competencia, sólo puede realizarse si se respetan las vías recursivas idóneas e independientes que existen actualmente a través de los procesos por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

#### IV

No obstante los antecedentes que avalan la existencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la opinión pública ha sido sorprendida frente a una eventual disolución de dicho organismo jurisdiccional al amparo de una reforma de la estructura del Estado.

Si el problema de la seguridad inquieta en esta instancia y bajo tal hipótesis, aparece que la eventual disolución de dicho órgano jurisdiccional no encuentra otra razón que no sea la degradación que postula una corriente minoritaria sobre el uso alternativo del derecho, donde el rol de la justicia objetiva pasa a ser un valor secundario.

La problemática procesal fiscal no puede ser tratada a la ligera como supone la disolución del Tribunal Fiscal de la Nación. En efecto, los treinta y cinco años de actuación consecutiva del órgano han producido desde su inicio una evolución doctrinaria y docente imposible de superar, y cuyos logros han servido de fuente jurisprudencial a otros organismos homónimos.

El ensamble interdisciplinario de su integración, tal vez el mayor logro de su funcionamiento pleno, ha dado respuesta integrada al unísono por conceptos económicos y jurídicos a cada pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación.

Los que de inicio y en minoría mostraron voces disonantes o desaprobatorias de dicho Tribunal, con el tiempo debieron rever sus posiciones críticas a la luz de la producción jurídica del órgano en cuestión. No hizo falta publicitar la bondad del Tribunal Fiscal, porque sus fundadas sentencias en la gran mayoría de las causas, hablan por sí solas.

Cada pronunciamiento del órgano administrativo e independiente contiene una consecuencia lógica y patológica del hecho imponible analizado, la trascendencia del mismo y de las conductas instrumentales de los administrados que pudieron haber generado cursos de acción disvaliosos en el campo administrativo.

Suponer ahora que suprimir dicho Tribunal no trae demérito a la seguridad jurídica del administrado es partir de bases totalmente equivocadas. Está reconocido a nivel doctrinario que sólo los tribunales especializados e interdisciplinarios dan respuesta adecuada al fenómeno tributario en su justa dimensión.

Otra tesis sería negar la propia esencia del hecho imponible y de la relación jurídica tributaria, para partir de premisas parciales del fenómeno antes aludido que por sí solas no dan respuesta a la controversia.

Para decir una afirmación objetiva, el Tribunal Fiscal de la Nación, desde su creación ha obviado tales desinteligencias interpretativas, brindando seguridad jurídica para el poseedor de la verdad jurídica, se trate del propio Estado como del contribuyente, dado que en todas sus decisiones ha privado la consecuente interpretación del fenómeno tributario con abstracción de la parte interviniente.

Intentar volver la página a un pasado procesal superado importa un propio retroceso en la vida en sociedad, y traduce a su vez dar vuelta a la historia sin razón válida.

La inteligencia del proceso impositivo se ha nutrido desde el año 1960 de la diáfana interpretación del Tribunal Fiscal de la Nación; sus decisiones se han plasmado en torno a la especialidad del fenómeno tributario, aplicada por especialistas en la materia; decisiones, muchas de ellas, que hoy son parte del acervo doctrinario adoptado por otros organismos similares de Latinoamérica.

Debe tenerse presente que al día de hoy, y mediante el imperio que emana de la reforma constitucional, la derogación del principio "solve et repete" tiene consagración en el articulado del art. 75 de la Carta Magna, visto que tal garantía encuentra plena ratificación en el Pacto de San José de Costa Rica, en la condición jurídica supra que el nuevo texto constitucional le ha conferido.

Y ya que nos hemos referido a los Tratados ratificados y aprobados por la República Argentina, no podemos evitar referirnos al Artículo X del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, aprobado por leyes 17.799 y 24.425), que exige la existencia de un Tribunal especializado e independiente, como lo es el Tribunal Fiscal de la Nación.

La eventual supresión de este organismo por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades que le serían delegadas por el Proyecto de Ley, sería contraria al inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, ya que importaría desconocer la exigencia de dicho Tratado y la prevalencia que nuestra Constitución acuerda a éstos por sobre las leyes.

En las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en el año 1993 en Lima, Perú, se enfatizó en forma precisa sobre el valor garantista de la derogación del principio "solve et repete" como muestra de una sociedad respetuosa del administrado, y en dicho evento se hizo expreso hincapié que cualquier intento de insertar el mismo, como condición para la revisión del acto por un órgano jurisdiccional administrativo era una muestra manifiesta de falta de seguridad jurídica en la aplicación del tributo.

Mas aún, las mismas Jornadas abogaron por la supresión de la regla "solve et repete" y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado e inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional, así como la posibilidad de suspensión del acto impugnado, son necesarios para la igualdad de las partes.

Eventos de igual jerarquía científica también han proclamado que la pretensión de reimplantar el principio de "solve et repete" por la vía de eliminación del actual proceso por ante el Tribunal Fiscal de la Nación es una arbitrariedad que menoscaba el derecho irrestricto del contribuyente, atendiendo que dicho derecho subyace en los postulados de la vida en sociedad.

Las XXIII Jornadas Tributarias celebradas en el año 1993 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, señalaron que el Tribunal Fiscal de la Nación cumple un rol importante en la relación fisco-contribuyente, otorgándole transparencia al sistema tributario, erradicando la anacrónica figura del "solve et repete" y dando la posibilidad al contribuyente o responsable de litigar en un ámbito altamente especializado permitiéndole además, mantener en suspenso el pago de la obligación tributaria.

El legislador, imbuído de espíritu reformista no puede ignorar la fecundidad del derecho comparado, porque el mismo nos enseña, en primer lugar, a conocer las líneas esenciales de nuestro propio derecho.

Si el H. Congreso de la Nación detiene su proceder en investigar en esta última fuente, podrá comprobar que el proyecto de supresión del Tribunal Fiscal de la Nación no encuentra antecedentes válidos que así lo justifiquen.

El clima de seguridad jurídica, sin el cual no hay libre competencia, sólo puede realizarse si se respetan las vías recursivas idóneas e independientes que existen actualmente a través de los procesos por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

## IV

No obstante los antecedentes que avalan la existencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la opinión pública ha sido sorprendida frente a una eventual disolución de dicho organismo jurisdiccional al amparo de una reforma de la estructura del Estado.

Si el problema de la seguridad inquieta en esta instancia y bajo tal hipótesis, aparece que la eventual disolución de dicho órgano jurisdiccional no encuentra otra razón que no sea la degradación que postula una corriente minoritaria sobre el uso alternativo del derecho, donde el rol de la justicia objetiva pasa a ser un valor secundario.

La problemática procesal fiscal no puede ser tratada a la ligera como supone la disolución del Tribunal Fiscal de la Nación. En efecto, los treinta y cinco años de actuación consecutiva del órgano han producido desde su inicio una evolución doctrinaria y docente imposible de superar, y cuyos logros han servido de fuente jurisprudencial a otros organismos homónimos.

El ensamble interdisciplinario de su integración, tal vez el mayor logro de su funcionamiento pleno, ha dado respuesta integrada al unsono por conceptos económicos y jurídicos a cada pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación.

Los que de inicio y en minoría mostraron voces disonantes o desaprobatorias de dicho Tribunal, con el tiempo debieron rever sus posiciones críticas a la luz de la producción jurídica del órgano en cuestión. No hizo falta publicitar la bondad del Tribunal Fiscal, porque sus fundadas sentencias en la gran mayoría de las causas, hablan por sí solas.

Cada pronunciamiento del órgano administrativo e independiente contiene una consecuencia lógica y patológica del hecho imponible analizado, la trascendencia del mismo y de las conductas instrumentales de los administrados que pudieron haber generado cursos de acción disvaliosos en el campo administrativo.

Suponer ahora que suprimir dicho Tribunal no trae demérito a la seguridad jurídica del administrado es partir de bases totalmente equivocadas. Está reconocido a nivel doctrinario que sólo los tribunales especializados e interdisciplinarios dan respuesta adecuada al fenómeno tributario en su justa dimensión.

Otra tesis sería negar la propia esencia del hecho imponible y de la relación jurídica tributaria, para partir de premisas parciales del fenómeno antes aludido que por sí solas no dan respuesta a la controversia.

Para decir una afirmación objetiva, el Tribunal Fiscal de la Nación, desde su creación ha obviado tales desinteligencias interpretativas, brindando seguridad jurídica para el poseedor de la verdad jurídica, se trate del propio Estado como del contribuyente, dado que en todas sus decisiones ha privado la consecuente interpretación del fenómeno tributario con abstracción de la parte interviniente.

Intentar volver la página a un pasado procesal superado importa un propio retroceso en la vida en sociedad, y traduce a su vez dar vuelta a la historia sin razón válida.

La inteligencia del proceso impositivo se ha nutrido desde el año 1960 de la diáfana interpretación del Tribunal Fiscal de la Nación; sus decisiones se han plasmado en torno a la especialidad del fenómeno tributario, aplicada por especialistas en la materia; decisiones, muchas de ellas, que hoy son parte del acervo doctrinario adoptado por otros organismos similares de Latinoamérica.

A través de lo expuesto no aparecen razones valederas para proceder a la supresión de un órgano jurisdiccional de probada capacidad decisoria, donde sus miembros han hecho un culto de la seguridad jurídica para ambas partes de la contienda tributaria.

En los procesos por ante el Tribunal Fiscal se ha visto la verdadera congruencia del principio recurrente, bajo la premisa que dicho órgano ha respetado los compromisos de los principios fundamentales del ordenamiento republicano en su funcionamiento efectivo.

Desde el prisma del derecho procesal, el Tribunal Fiscal aparece como la demostración de la jurisdicción neutra, separada, independiente de la administración activa, pero insustituible por la especialidad de sus integrantes en el conocimiento cierto y extenso de la intrincada problemática tributaria en toda su dimensión.

Si el ejercicio del poder es el equilibrio que resguarda la vida en sociedad, nunca más apropiado sostener que cualquier intento de suprimir la vigencia efectiva de los tribunales fiscales administrativos, mostrará al mundo civilizado que la seguridad jurídica se ha transformado en una garantía subsidiaria y no principal.

Pero además, el intento de supresión del Tribunal Fiscal por vía de un reglamento delegado, dicho una vez más, resultaría no sólo un desacierto político sino un supuesto claramente violatorio de los principios constitucionales a los cuales el legislador está sometido.

Si esto último es entendido en su real alcance, no se duda que los intentos de supresión del órgano jurisdiccional no tendrán cabida en la mente del legislador.

Lo que antecede no supone diferir sugerencias sobre algunas reformulaciones necesarias en la marcha de tal organismo. En dicho alcance sería conveniente la creación de vocalías unipersonales, la competencia plena de cada Vocal tanto en temas aduaneros como impositivos, examinar la limitación que contiene la ley 11.683 en cuanto prohibir al órgano dictar la inconstitucionalidad de la norma bajo litigio, ampliar su competencia a los problemas que hoy sin sustento válido están sustraídos de su conocimiento, los cuales repercuten en forma intensa en la relación jurídico-tributaria de toda índole, y sobre todas las cosas proceder con la premura del caso a la integración de las Vocalías vacantes, muchas de las cuales muestran injustificada acefalía desde largos años.

No existe la menor duda que la tardanza incurrida desde larga data, por el Poder Ejecutivo en cubrir las vacantes existentes en dicho órgano jurisdiccional han perturbado su accionar, sin que ello pueda imputarse como acción propia del órgano administrativo, en cuyo orden podría inferirse que en realidad, ha sido dicho poder público el que no ha contribuido recurrentemente al funcionamiento pleno del Tribunal Fiscal de la Nación como las exigencias así lo requieren.

Si la voluntad política es ratificar la vigencia del pleno Estado de Derecho en su mejor expresión moderna, no se duda que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene asignado un rol propio e insustituible en dicha concreción jurídica.

No puede finalizarse este pronunciamiento sin advertir, que a contrario del proyecto existente en el H. Congreso de la Nación, en forma reciente la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ha dado media sanción al proyecto de ley que amplía el número de integrantes del Tribunal Fiscal de dicho estado provincial.

Esto último delata la contradicción sobre la supresión de un organismo

administrativo jurisdiccional en la esfera federal, cuando el mismo organismo es repotenciado, a nivel provincial, en su continuidad jurídica, en razón de su valía, por los legisladores bonaerenses.

Como conclusión de todo lo expresado, deseamos respetuosamente llamar la atención de las autoridades, respecto de la mencionada eventual eliminación del Tribunal Fiscal de la Nación, hecho que, de concretarse, representará, como hemos expresado, un claro retroceso en la historia del procedimiento tributario en nuestro país. Toda medida que conspira contra la permanencia del Tribunal Fiscal de la Nación, vulnera las bases más pristinas en las que se asienta la seguridad jurídica de los administrados, fundamento de nuestro sistema republicano.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1995

*Consejo Directivo*

*(Pronunciamiento elaborado por la Comisión de Derecho Penal Tributario y aprobado por el Consejo Directivo).*